

# ***México. La reestructuración en marcha***

**Gilly, Adolfo**

---

**Adolfo Gilly:** Escritor, periodista y politólogo mexicano. Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Columnista de numerosas publicaciones nacionales y extranjeras.

---

Una reestructuración económica y jurídica del capitalismo mexicano ha estado teniendo lugar en estos años. Su desenlace cercano parece ser la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que los negociadores esperan concluir para el año 1992, inaugurando lo que denominan la mayor zona del libre comercio del mundo por número de habitantes: 360 millones.

La reestructuración mexicana involucra:

- una concentración del capital - y del poder de decisión económico - en 12 grupos financieros dominantes (o en 37 grandes capitanes de empresa, que integran el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios), estrechamente asociados con el capital financiero internacional
- una reestructuración de las relaciones entre capital y trabajo a nivel de la producción, flexibilizando las normas de trabajo, desmantelando los contratos y debilitando al máximo los sindicatos
- una supresión progresiva de los subsidios a los artículos de consumo popular y un alza de las tarifas de los servicios públicos
- una caída salarial sostenida desde 1976: la participación de los salarios en el PIB descendió de 40,3 por ciento en aquel año a 23,1 por ciento en 1989, con una disminución del 58 por ciento en el valor del salario mínimo entre esos mismos años
- una apertura externa casi total a la inversión de capitales y a las importaciones (con tarifas aduaneras en torno del 10% como promedio)
- un estímulo estatal sostenido a las exportaciones industriales, que crecieron desde 3 a 4 mil millones de dólares al comienzo de los años 80 a 16 mil millones de dólares en 1989

- una privatización acelerada de las empresas de propiedad estatal (teléfonos, minería, siderurgia, aviación, petroquímica secundaria, metalurgia, material ferroviario, etc.), en la cual sólo la propiedad del petróleo por Petróleos Mexicanos parece, por el momento, quedar fuera de la marea privatizadora (pero la marea no ha terminado de subir...).

Entre los éxitos reivindicados hasta ahora por los promotores del proyecto está el control de la inflación en 1989 y 1990 en torno de un 25% anual, tasa que se mantiene en los primeros tres meses de 1991. Dentro del crecimiento de las exportaciones industriales debe incluirse el rápido crecimiento de la industria «maquiladora» (que trabaja para la exportación con un 98 por ciento de insumos importados exentos de impuestos y donde el principal aporte mexicano es la mano de obra barata). Este sector es en los hechos parte del aparato productivo del país vecino, Estados Unidos, para el cual sus mayores ventajas comparativas residen, precisamente, en el bajísimo costo de la fuerza de trabajo, en la estructura impositiva mexicana más favorable y en la laxitud o inexistencia de los controles sobre contaminación ambiental y legislación del trabajo.

### ***De la protección social garantizada...***

La transformación jurídica comprende la reforma de la legislación sobre inversiones extranjeras y sobre empresas estatales; la legislación del trabajo; la protección social; la legislación agraria que protege la propiedad ejidal. También aquí, la «desregulación» es la consigna del día. Es un proceso de desmantelamiento del Estado social (welfare state) inscrito en el articulado de la Constitución de 1917 surgida de la Revolución Mexicana de 1910. Ese Estado se institucionalizó a partir de las reformas sociales durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940). Si bien muchas de esas normas se mantienen en la forma, han ido vaciándose de contenido en la política oficial. Por ejemplo, el gobierno deja caer a las instituciones públicas de seguridad social y estimula el recurso a seguros, planes e instituciones privadas de salud, sólo accesibles a sectores restringidos de la población.

Esta destrucción o desvanecimiento de las conquistas sociales de períodos anteriores es similar a la provocada por las políticas neoliberales en muchos otros países de América Latina y del mundo. La peculiaridad es que en México esas conquistas (mínimos legalmente garantizados de ingresos, ocupación, vivienda, educación, salud) son, al menos en la ley si no en la realidad, disposiciones constitucionales: el pacto social es un pacto constitucional.

Sobre ese pacto se sostiene el régimen de partido de Estado, en el cual los sindicatos y las organizaciones campesinas están integrados corporativamente en el aparato estatal y forman parte de su partido, el PRI. Esa subordinación corporativa de sus organizaciones urbanas y rurales impide a los trabajadores resistir el desmantelamiento progresivo del welfare state y defender aquellas conquistas (más aún en la situación defensiva en que los ha colocado la crisis). Pero, al mismo tiempo, tal desmantelamiento afecta a la base social del régimen político mismo por lo que la transformación neoliberal pone en peligro su propia estabilidad.

Esta paradoja está en la raíz de la actual crisis del régimen de partido de Estado en México, paralela y concomitante a las crisis y derrumbes que ese tipo de regímenes ha atravesado en Europa del Este y en otras regiones del mundo. Esa crisis tuvo en México una primera expresión política masiva en las elecciones de julio de 1988, en las cuales la elección de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República estuvo viciada de fraude electoral y la oposición democrática y de izquierda reclamó la victoria para su candidato, Cuauhtémoc Cárdenas, sin que el gobierno presentara pruebas definitivas a favor del resultado oficial.

En los tres años transcurridos desde entonces, las transformaciones neoliberales se han intensificado. Ellas conducen a una homologación del régimen económico y jurídico mexicano con el de Estados Unidos, precondition y corolario al mismo tiempo del Tratado de Libre Comercio. Este sería finalmente la garantía supranacional de la irreversibilidad de la reestructuración contra eventuales cambios políticos en México.

### ***...a la caridad ocasional institucionalizada***

Mientras tanto, montando un Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) que dispone de amplios recursos públicos para atender caso por caso necesidades de los sectores más marginados, el gobierno ha tendido una red protectora provisional para prevenir o contener eventuales estallidos provocados por su política económica y para mantener, al mismo tiempo, un instrumento político-electoral clientelar en esos sectores (pues junto con las ayudas del Pronasol vienen los condicionamientos políticos).

En medio de la desorganización y la indefensión general de la mayoría de la población, esta conversión obligada de la protección social garantizada en caridad ocasional institucionalizada dependiente de la voluntad gubernamental, ha logrado al-

gunos de sus objetivos, aunque es imposible predecir por cuánto tiempo y si tenderá a una institucionalización permanente.

El recurso al Pronasol confirma, por otro lado, la durabilidad del pacto corporativo en las costumbres, la sociedad y la politicidad mexicanas. Los costos políticos del debilitamiento del antiguo corporativismo tratan ahora de ser parcialmente cubiertos por estas nuevas y fragmentadas formas de corporativismo social. Si la corrupción de los funcionarios es el precio inexorable de las relaciones estatales corporativas (en México, Europa del Este, China o la Unión Soviética), es posible imaginar sin esfuerzo cómo este neocorporativismo para pobres y desamparados alimenta nuevas fuentes de esa corrupción.

La ruptura del pacto social desde el gobierno ha llevado las tradicionales desigualdades y pobreza mexicanas a límites intolerables. En México, nación con notable desarrollo industrial y urbano y con una fuerte corriente exportadora hacia Estados Unidos de productos manufacturados (electrónica, automóvil, textiles, siderurgia, agroindustria), 40 millones de habitantes - casi la mitad de la población - viven por debajo de los límites de pobreza, tal como éstos han sido establecidos por organismos internacionales. De esos 40 millones, 17 millones (un 20% de la población) viven en situación de pobreza extrema. Según cifras del gobierno mexicano, la desnutrición afecta a más del 50% de los niños y 33 millones de mexicanos - un 40% de la población - tienen una dieta alimentaria por debajo de los mínimos establecidos por los organismos internacionales. En algunas regiones del país, la esperanza de vida es apenas de 40 años. El 49% de las viviendas del país carece de drenaje (en los estados más pobres y zonas rurales, el 80%) y el 25% no tiene electricidad (en los estados más pobres el 58%).

Sobre tales niveles ha operado la caída drástica del gasto social del Estado, en la cual se combinan la crisis (incluida la crisis de la deuda externa, cuyo monto supera los 100 mil millones de dólares) y las concepciones neoliberales. En 1980 tocaba al campo el 19% de la inversión pública; en 1989 solamente el 5% (en los años 60 se importaron 689 mil toneladas de alimentos básicos; en los ochenta 60 millones de toneladas). En 1981 se destinó al gasto educativo el 5,5% del PIB; en 1987, sólo el 3,6% (en un país donde un 8% de la población mayor de 15 años es analfabeta, un 25% no ha completado la escuela primaria y un 39% tiene «analfabetismo funcional»; y donde de cada 100 niños que ingresan al ciclo primario, 45 no lo concluyen y de cada 100 jóvenes que entran a la educación superior, 49 no la completan).

Como puede comprenderse, un proceso de reestructuración capitalista donde se combinan esta pobreza y aquel crecimiento industrial y económico, más la transnacionalización de la economía, la corrupción estatal y la falta de controles democráticos producto del autoritarismo, el fraude electoral y el repliegue de las organizaciones sociales no puede sino dar como resultado un incremento fantástico de la catástrofe ecológica urbana y rural, la contaminación del aire y de las aguas, la destrucción de los bosques, la desertificación de zonas enteras, la ruina de la agricultura de subsistencia. En otras palabras, un proceso antagónico a cualquier concepción de desarrollo autosostenido.

### ***¿Un paso hacia el Primer Mundo?***

Este es el México que avanza en su integración con la economía de Estados Unidos y se prepara a firmar un Tratado de Libre Comercio con este país y con Canadá, dos de las siete grandes economías industriales del mundo. En la propaganda oficial, este tratado es presentado como la antesala del ingreso de México al Primer Mundo, promesa tan enorme que bastaría por sí sola para suscitar cierta desconfianza en los objetivos y los resultados de la operación.

El Tratado de Libre Comercio versa esencialmente sobre intercambios comerciales e inversiones de capital. Excluye negociaciones sobre migración (millones de mexicanos ingresan legal o ilegalmente a Estados Unidos en busca de trabajo), leyes de protección ambiental y, por el momento, el petróleo (sin embargo, pese a las negativas oficiales mexicanas existe una fuerte presión de los negociadores estadounidenses para que el petróleo sea finalmente incluido en los acuerdos y se «flexibilicen» las normas constitucionales que hacen de su explotación un monopolio del Estado). En otras palabras, el principal incentivo que el Tratado puede ofrecer a los inversionistas extranjeros es un acceso libre a los mercados del Norte del continente con la ventaja de la mano de obra barata mexicana.

Esta mano de obra tiene un diferencial de productividad con la de Estados Unidos. La relación entre la productividad media por trabajador de las industrias mexicana y estadounidense a la mitad de los años 80 era de 1 a 4. Ahora bien, la diferencia salarial media es de 1 a 5. Se delimita así el margen de competitividad existente a favor de México; sin embargo, en los hechos ese margen es más amplio y duradero, pues la productividad en las industrias que trabajan para la exportación («maquiladoras» y otras) es notablemente superior a la media y en algunos casos (como en el sector automovilístico) se aproxima a la de Estados Unidos. Mientras sus salarios están fuertemente contenidos dentro de los promedios nacionales mexicanos. En otros

términos, en la industria exportadora los promedios mexicanos contienen mucho más los salarios que la productividad, condición que opera en favor de los planes de exportación manufacturera y de integración económica.

Por el contrario, en la industria que trabaja para el mercado interno las desventajas son enormes. A un mercado deprimido como lo muestran las cifras antes mencionadas, hay que agregar un lento crecimiento de la productividad del trabajo y el ingreso masivo de productos de consumo extranjeros más baratos debido a la liberalización aduanera y comercial. La separación en dos segmentos de la industria mexicana avanza tan inexorablemente como la paralela separación del mercado consumidor en una amplia mayoría deprimida y una minoría emergente (que incluye sectores asalariados, habiéndose ensanchado el abanico salarial) que se orienta a consumir más productos de importación y engancha de un modo u otro sus perspectivas (como asalariados, técnicos, profesionales o inversionistas) al sector dinámico-exportador.

Estas perspectivas implican una aceleración aún más violenta de la reestructuración del capitalismo mexicano, un tratamiento de choque que puede provocar severos contragolpes políticos y sociales.

El gobierno mexicano confía en contrarrestar esos peligros con una mejoría rápida de la situación económica, inducida en parte por el flujo de inversiones extranjeras que se supone el Tratado desencadenará. «En su impulso para modernizar y privatizar la economía mexicana, Salinas necesita desesperadamente los 25 mil millones de dólares que espera serán atraídos por el acuerdo hasta el fin de su período presidencial en 1994», escribe el 1° de abril de 1991 la revista Newsweek.

En otras palabras, el destino del régimen político dominado por el Partido Revolucionario Institucional, ha quedado ligado a la suerte que corra el Tratado de Libre Comercio. La integración es el gran programa histórico que el régimen ofrece al país.

Si ésta no se concreta o si sus resultados no logran mejorar en un plazo relativamente corto la situación económica, el régimen político volverá a estar seriamente amenazado, frente a las crecientes demandas de elecciones sin fraude, respeto a los derechos humanos y posibilidad efectiva de alternancia en el gobierno a través de un régimen plural de partidos.

El «pluralismo» es hoy altamente imperfecto, puesto que si bien existen diversos partidos no se ha materializado la posibilidad de disputar el poder presidencial: la legislación deja a los procesos electorales bajo control del gobierno, no de los partidos o de la sociedad, lo cual institucionaliza el fraude; contiene además una «cláusula de gobernabilidad» por la cual el partido que obtenga el 35 por ciento de los votos alcanzará el 51 por ciento de las bancas en la Cámara de Diputados, y el PRI conserva todos los recursos económicos y logísticos del Estado y el monopolio total de la televisión.

### ***La apuesta geopolítica de EEUU***

Del otro lado de la frontera, el Tratado de Libre Comercio es para George Bush, ante todo, una gran apuesta geopolítica. Carla Hills, la negociadora del Tratado por Estados Unidos, ha declarado que éste es, para su gobierno, «una prioridad geopolítica». Norman Bailey, ex-funcionario del Consejo Nacional de Seguridad, dice que si la cuestión del Tratado está directamente en manos de Bush, es «debido a que para la Casa Blanca el proyecto tiene un valor geopolítico más que económico» (El Financiero, México, 15 abril 1991). Al mismo periódico Elliot Abrams, ex-subsecretario adjunto para Asuntos Interamericanos, declara que «ceder soberanía es el precio de dejar de ser pobre: la prosperidad tiene su costo». Por su parte, Henry Kissinger, geopolítico antes que otra cosa, escribe que «el centro de gravedad de la política exterior de Estados Unidos se desplaza hacia el hemisferio occidental».

Washington persigue con este Tratado ir avanzando en un doble objetivo. Por un lado, lanzar el asalto del siglo contra el valor de la fuerza de trabajo estadounidense, contra los asalariados de la industria y de los servicios, disolviendo lo que queda de sus organizaciones y de su poder de negociación en un mar infinito de mano de obra barata y poniéndolos a competir, para desgracia de ambos, con los salarios y puestos de trabajo mexicanos y latinoamericanos. Por el otro, proseguir la secular expansión del poderío estadounidense hacia el Sur (con mayor razón ahora que nuevos rivales capitalistas lo desafían), controlar los recursos petroleros mexicanos, cerrar mañana la brecha canadiense que lo separa de Alaska y pasado mañana la brecha mexicana y centroamericana que lo separa del Canal de Panamá, unificando así en un continuo territorio la gran fortaleza geopolítica continental Americana. No se logrará de un día para otro, pero el movimiento ha venido progresando desde hace años y no se ven sus límites.

El Tratado de Libre Comercio, que según sus defensores mexicanos llevará los salarios, las normas de calidad industriales y la protección ecológica en México a los

niveles de Estados Unidos, no cuenta con una opinión pública mexicana demasiado adversa. Existe, al contrario, cierta expectativa favorable que, en medio del túnel de la crisis, tiende a creer en esas promesas. Es una nueva versión del viejo mito de los pobres del mundo, América. La revista mexicana *Este País* acaba de publicar en su primera edición (abril 1991) una encuesta de 1990 en la cual un 59% de los mexicanos interrogados declara que estaría de acuerdo en integrarse en un solo país con Estados Unidos «si ello significara una mejor calidad de vida». La frustración de estas ingenuas ilusiones puede revelarse más adelante, con Tratado o sin él, devastadora para el régimen político.

En Estados Unidos se oponen al Tratado los sindicatos (AFL-CIO), que ven una amenaza sobre sus salarios, contratos y puestos de trabajo, y las muy difundidas organizaciones de ecologistas, que temen que los niveles de contaminación y descontrol mexicanos, con la complicidad de las autoridades mexicanas y de las industrias estadounidenses que buscarán un santuario antiecológico al sur del río Bravo, afectarán a la naturaleza, el aire y las aguas en la extensa región fronteriza y erosionarán los niveles conquistados en Estados Unidos.

La apuesta es grande y no se decidirá en una sola vuelta. Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente del Partido de la Revolución Democrática y jefe de la oposición democrática y de izquierda en México, ha viajado continuamente por Estados Unidos y Canadá planteando, frente al Tratado en preparación, un Acuerdo Continental para el Desarrollo y el Comercio que incluya en principio a América Latina y comience por la protección al trabajo de Estados Unidos y de México, a la agricultura de subsistencia, a la salud y la ecología, a los migrantes mexicanos y latinoamericanos en EEUU, sobre esas bases convenga inversiones y flujos comerciales acrecentados. Una fuerte oposición al Tratado ya firmado con Estados Unidos existe en Canadá, encabezada por el *New Democratic Party*, actualmente en el gobierno de la provincia de Ontario. Todas estas oposiciones están en conexión entre ellas.

Con la reestructuración de México el PRI intenta conservar el poder, pero corre el riesgo de desencadenar una movilización electoral superior a la de 1988, perder el gobierno a manos de la oposición y ver frustrados a mitad de camino los objetivos de su política neoliberal. Si mantiene el autoritarismo, el fraude, la corrupción y el sistema de partido de Estado, es difícil imaginar cómo puede avanzar en la vía de la modernización económica y del mercado común norteamericano, del mismo modo como los regímenes de España y Grecia tuvieron que transitar a la democracia representativa antes de ingresar a la Comunidad Europea. México es uno de los



últimos regímenes de partido de Estado que subsisten en países de similares niveles de desarrollo y cultura.

Desde cualquiera de ambos extremos que se la vea, la cuestión de la democracia sigue apareciendo como la clave política sobre la cual se decidirá en definitiva la suerte de las cuestiones internacionales, económicas y sociales hoy en juego en la reestructuración mexicana.